

TEMES

La gran confrontación como paradigma de historia comparada en el área mediterránea

Giovanni C. Cattini; Antonio Marimon

UNIVERSIDAD DE BARCELONA;
UNIVERSIDAD DE BALEARES

ABSTRACT

El escrito ofrece una aproximación a los temas tratados en el seminario La gran confrontación entre democracia y dictadura. Se presentan por apartados: la cronología de la modernización de la sociedad mediterránea; las raíces de la debilidad del liberalismo y el papel de los intelectuales; el uso público de la historia en el debate historiográfico acerca del fascismo/antifascismo y sus transiciones; el papel de la Iglesia; el Ejército y el militarismo en los regímenes autoritarios.

Palabras clave: historiografía, democracia, dictadura, fascismo, militarismo, Iglesia.

ABSTRACT

The piece offers an approach to the subjects dealt with in the seminar “The great confrontation between democracy and dictatorship”. They are presented in different sections: the chronology of the modernization of the Mediterranean society; the causes of the weakness of liberalism and the role of the intellectuals; the public use of history in the historiographic debate with regards to Fascism/anti-Fascism and its transitions; the role of the church; the Army and militarism in authoritarian régimes.

Key words: historiography, democracy, dictatorship, Fascism, militarism, Church.

El texto que sigue pretende recoger algunas de las reflexiones que han acompañado el seminario “La gran confrontación entre democracia y dictadura”, que tuvo lugar en Barcelona el 19 y el 20 marzo de 2010.

La premisa de este seminario era la pretensión de reflexionar sobre el papel público de los intelectuales en relación con el debate entre democracia y dictadura, opciones que caracterizaron buena parte del debate político durante el siglo XX. En otras palabras, este seminario obedecía a la crociana reflexión acerca de la importancia del presente para entender las coordenadas de los historiadores, con la intención de aproximarnos de una manera matizada a los grandes condicionados políticos, culturales, ideológicos, económicos, etc., y a su repercusión a la hora de codificar el debate sobre la democracia y la dictadura desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta los años centrales de la Guerra Fría. Un debate en el que la reflexión sobre estos fenómenos estuvo marcada por una fortísima politización.

El escrito que sigue intenta ofrecer una aproximación a los temas tratados en el seminario que desbordaron los límites cronológicos que nos habíamos fijado a la hora de plantearnos la problemática. Por esta razón, nos ha parecido oportuno sintetizar algunos de los grandes temas de comparación histórica que se debatieron en las jornadas y que podríamos subdividir en los siguientes puntos: la cronología de la modernización de la sociedad mediterránea; las raíces de la debilidad del liberalismo y el papel de los intelectuales; el uso público de la historia en el debate historiográfico acerca del fascismo/antifascismo y sus transiciones; el papel de la Iglesia; el Ejército y el militarismo en los regímenes autoritarios.

La modernización de la sociedad mediterránea

Uno de los grandes temas de análisis que han acompañado las sesiones del seminario fue la reflexión sobre la cronología que se tiene que adoptar para poder comprender las pautas para debatir sobre democracia y dictadura. La propuesta inicial había sido fijar las coyunturas de larga, corta o media duración en las décadas de 1940 hasta 1970, a pesar de que esta cronología fue reiteradamente matizada con las referencias obligadas a la irrupción de la modernidad en la sociedad mediterránea de finales del siglo XIX. Se sugirió este planteamiento para poder evaluar el debate sobre la modernización de las sociedades del sur de Europa, la dificultad de los procesos de democratización de los países de esta área, con sus líneas de continuidad y ruptura, tanto en los procesos económicos como en el debate político. Cobraron entonces interés los antecedentes de aquella crisis del

Estado liberal que resultó, prácticamente irreversible a partir del final de la Primera Guerra Mundial para muchos estados del área mediterránea,

El antecedente de crisis de Estado mediterráneo tenía un ejemplo muy claro en la Tercera República francesa nacida bajo el trauma de Sedan y de la Comuna de París. La Constitución de 1875 no consiguió estabilizar políticamente el país: el sistema bicameral preveía un Senado restringido y un Parlamento elegido por sufragio universal. El resultado fue que, entre 1875 y 1914, se sucedieron unos cincuenta gobiernos y la vida política se caracterizó por las presiones clientelares de las diferentes oligarquías. En este marco, el discurso de Léon Gambetta sobre la necesidad de llevar a cabo “reformas oportunas” fue utilizado después para calificar todo el periodo histórico en cuestión, lo cual deja claro que incluso el Estado más “avanzado” del Mediterráneo tuvo que modernizarse con una mezcla de clientelismo y coacciones políticas.

La Restauración monárquica de Cánovas de Castillo tuvo sus momentos álgidos en 1876, año en que se promulgó la Constitución, y en 1881, cuando la oposición liberal accedió por primera vez al poder. Entonces se consolidó una versión peculiar del bicameralismo inglés denominada “sistema del turno” –término introducido por el mismo Cánovas– en virtud del cual conservadores y liberales se alternaban no en función de los resultados electorales sino por pactos concluidos con anterioridad (simbolizados por el Pacto del Pardo de 1884). Una vez formado el nuevo gobierno, el partido en el poder ganaba las elecciones que convocaba con la ayuda fundamental del ministro de Gobernación. La crisis de 1898 hizo que se multiplicaran las voces a favor de una regeneración del país, aunque el “sistema del turno” siguió prácticamente vigente a nivel estatal hasta la instauración de la dictadura de Primo de Rivera.

La credibilidad de la política era cuestionada también en Italia porque, después de la “revolución parlamentaria” de 1876 y la ampliación del sufragio en 1881, se había engendrado el “transformismo”. Esta práctica estaba ligada al discurso de Agostino Depretis, líder de la Sinistra, que planteaba la “necesidad de transformación de la política” y que se tradujo en el hecho de que el partido en el poder se apoyaba en el sector más moderado de su coalición, y sobre todo en los hombres de la coalición opuesta que aceptaban el programa de gobierno. Esta praxis de poder, que aspiraba a construir “un

gran centro”, tuvo su intérprete más lúcido en Giovanni Giolitti, que gobernó antes de la Primera Guerra Mundial, y llegará con todas sus contradicciones hasta la instauración de la dictadura fascista de 1922.

El caso portugués tampoco difiere mucho, a pesar de que el intento de introducir un bipartidismo a la inglesa es anterior en un par de décadas: la dialéctica entre el Partido de la Regeneración y el Partido Histórico, base de la primera modernización del país, se desarrolla a partir de la década de 1850. Hay que remarcar que, también en este país, los cambios de gobierno eran anteriores a las elecciones que, en un clima de manipulaciones, favorecerían siempre la coalición gubernamental, que era así confirmada en el poder. Este sistema entró en crisis de una manera irreversible a partir de 1890, debido a la doble acción de la crisis económica por un lado y de la creciente presión del republicanismo por el otro, que dio un golpe de timón al impulsar el golpe de Estado de 1910. De todos modos, se ha subrayado bastante a menudo la permanente crisis del sistema liberal entre 1890 y 1926. No se puede ignorar que en aquel entonces el censo electoral representaba alrededor del 10% de la población y que el sufragio universal (masculino y femenino) sólo sería efectivo a partir de 1975.

En el sector más oriental del Mediterráneo septentrional, también es elocuente el caso de Grecia, cuya vida política se caracterizó por un incipiente sistema de sufragio casi universal (Constitución de 1844) y que no obstante padeció un falseamiento constante de los procesos electorales, fruto de un arraigado sistema de clientelas de larga duración. La versión griega del bipartidismo a la inglesa fue la dialéctica entre los dos partidos de impronta personal que se alternaron en el poder durante el último cuarto del siglo XIX, obedeciendo los unos a Charilaos Trikoupis y los otros a Theodoros Deligiannis. La derrota contra los otomanos en Creta en 1897 marcó el inicio de un nuevo ciclo histórico cuyo momento álgido fue el golpe de Estado de Goudi, impulsado en 1909 por la Liga Militar de Nikolas Zorba. Este acontecimiento permitió que el estadista Elefterios Venizelos, nativo de Creta, se impusiera en la vida política griega. Venizelos consiguió en los doce años siguientes una importante expansión territorial, pero provocó también la división social y política del país que, después del gran desastre de 1922, se traduciría en dos décadas de inestabilidad política que acabaron en una sangrienta guerra civil, que para muchos historiadores representa el último acto de la Segunda Guerra Mundial.

Las raíces de la debilidad del liberalismo y el papel de los intelectuales

En este marco cronológico se produjo el primer gran momento en que se levantaron voces contrarias a la implantación de los sistemas liberales y de los procesos de democratización que los acompañaban. Los diferentes ponentes que han participado en el seminario han remarcado la crítica constante del sector intelectual al mundo que lo rodeaba y su desprecio hacia los procesos de democratización de los estados liberales que, precisamente, caracterizaban la época. De hecho, se ha insistido en que esta visión pone en entredicho la imagen estereotipada del intelectual como un militante de la izquierda política, una realidad que sólo sería propia de un visible sector de la intelectualidad en las décadas de 1960 y 1970.

La coyuntura intelectual de finales de siglo XIX, bajo el dominio de la escuela francesa, presentaba el primer gran planteamiento a nivel europeo de rechazo del parlamentarismo y del liberalismo político tal y como se había establecido hasta el momento, así como la reivindicación de sistemas alternativos, muchos de los cuales proponían el regreso a sistemas corporativos para garantizar la cohesión social ante la amenaza del individualismo de la nueva época.

La escuela francesa estaba encabezada por autores como Ernest Renan o Hippolyte Taine, que, tras la derrota de Sedan, empezaron un análisis desencantado y profundo sobre los orígenes y las causas de esta derrota: en este sentido se tienen que leer *La réforme intellectuelle et morale de la France* de Renan o la monumental e incompleta *Origines de la France contemporaine* de Taine, dos obras que representan la punta del iceberg de una abundante producción de intelectuales liberales y conservadores que se interrogaban sobre los males de Francia, empezando por la institución del sufragio universal, el chivo expiatorio de todas las angustias y repulsiones de la derecha gala. Renan y Taine compartían entonces una visión gradual del proceso histórico, la confianza en la ciencia como instrumento de gobierno, el rechazo de la democracia y del sufragio universal tal y como se había establecido en Francia después de 1848, la doctrina del *élitisme civilisateur* y el planteamiento de un sistema que compaginara liberalismo y tradicionalismo. La crisis de la *année terrible* de 1870 conduciría a Taine hacia un complejo compromiso político que no escondía unas posturas conservadoras –e incluso reaccionarias, que no obstante

podían convivir con otras de signo opuesto— que se sustentaban en el método científico y que reivindicaban la evolución lenta y gradual de la sociedad.

Origines de la France contemporaine expresaba claramente el desprecio y la disconformidad de su autor con sus tiempos y reclamaba, sobre todo, aquello que representaba el elemento vertebrador de una sociedad muy dirigida: las élites tradicionales. Esta convicción era fruto de la percepción de la naciente sociedad moderna, democrática y de masas, como ingobernable. Según Taine, para salir de la época de decadencia en que había entrado Francia con la Revolución del 1789, hacía falta restituir el poder a los grupos de la nobleza y los notables. Estos referentes nos permiten evaluar mejor la mentalidad de una época fuertemente influenciada por el peso de la jurisprudencia. De hecho, el Derecho, la carrera más cursada en aquella época, representa un elemento capital para entender la configuración de las coordenadas culturales y mentales de las clases dirigentes. Del mundo de las leyes salió un amplio sector intelectual que desarrolló un papel protagonista en las distintas dinámicas y formas que vertebraron los respectivos proyectos de constitución de Estado nacional moderno.

En particular, en las últimas décadas del siglo XIX, asumen un destacado protagonismo en la crítica al liberalismo doctrinario, y a la correspondiente encarnación política parlamentaria, intelectuales como Anatole Leroy-Beaulieu, Edmond Schérer, Frédéric Le Play, o los belgas Adolphe Prins y Émile de Laveleye, entre otros. Estos juristas se preguntaban reiteradamente sobre los límites del régimen parlamentario y de la democracia, recogiendo las sugerencias de Tocqueville.

Muchos de estos autores recogían la tesis central de Taine según la cual la crisis del parlamentarismo era el producto de la decadencia del orden social y político salido de la revolución de 1789. Su fracaso es el testigo del fracaso de las sociedades modernas, individualistas y atomizadas, incapaces de crear mayorías gubernamentales estables y de salir del caos en que se desarrolla la vida parlamentaria.

A esta reflexión central compartida por los autores mencionados, se añadía la idealización de las democracias comunales de la Edad Media, cuando los parlamentos eran el espejo de los grandes intereses sociales de las corporaciones ciudadanas. Este pasado idílico estaba presente en las páginas de autores como Edmund Burke, Joseph de Maistre o Louis de Bonald.

Frente a las reminiscencias del corporativismo había también quien defendía gobiernos autoritarios y fuertes, como Pasquale Turiello en Italia, quienes hablaban de “dictadura administrativa”, como en Portugal, o quienes como Joaquín Costa planteaban la necesidad de un cirujano de hierro; diferentes planteamientos que dejaban claro que el proyecto liberal de gobierno había tenido su primero gran momento de inflexión a finales del siglo XIX.

El uso público de la historia en el debate historiográfico acerca de fascismo/antifascismo y sus transiciones

El descrédito del liberalismo alcanzó su punto álgido en los años entre las dos Guerras Mundiales y se caracterizó por un clima de creciente enfrentamiento. La oleada revolucionaria de posguerra, que se caracterizó en muchos lugares de Europa y del Mediterráneo por conflictos armados y guerras civiles encubiertas, trajo la instauración de sistemas dictatoriales en diferentes países. La irrupción de Mussolini constituye el primer gran momento de involución política en el área mediterránea. Una involución que sería seguida rápidamente por otros países del área, empezando con el golpe de Estado de Primo de Rivera en España en septiembre de 1923 y continuando con el de Carmona en Portugal en 1926, que permitió la concentración de poderes en manos de Antonio Oliveria de Salazar y la imposición de un régimen autoritario a partir de 1928. A pesar de que compartían elementos como el rechazo al liberalismo y las libertades democráticas, había profundas diferencias entre estas dictaduras. Como ya observó el historiador italiano Renzo de Felice a mitades de la década de 1970, no pueden ser etiquetadas indistintamente como “experiencias fascistas” ni englobadas bajo el término genérico de “fascismo”.

Esta perspectiva no quiere excluir la posibilidad de comparar estas dictaduras reaccionarias, más bien al contrario; como se ha remarcado, esta relativización del problema tiene que ser útil a la hora de reclamar la necesidad de estudiar las dictaduras del siglo XX de manera conjunta. Este tema es de una gran complejidad precisamente por las divisiones que caracterizan los escenarios de la historiografía europea todavía hoy en día. Los debates historiográficos y las investigaciones sobre este periodo mantienen abiertas unas divisiones muy complejas entre los historiadores debido al interés público que suscitan estos temas.

Por esta razón, todavía hoy en día, se puede asistir a debates en los que, como en el caso italiano, se recurre a viejos argumentos para frenar lo que se considera una deriva neorevisionista. El caso italiano es paradigmático de cómo un sector importante de la historiografía ha magnificado incluso toda resistencia al régimen, dejando al margen la oposición de las fuerzas liberales a los fascismos.

En los días del seminario se destacó la importancia de estos elementos y se subrayó la aportación del encuentro para centrarse en aspectos tan importantes de la labor historiográfica como el análisis del discurso y el estudio del contexto, tanto del debate ideológico de la época como de los enfrentamientos historiográficos que lo acompañaron. Por esta razón hablar de la confrontación entre democracia y dictadura es ir a la raíz del problema, fijando los extremos temporales en que la reivindicación democrática quedó peligrosamente arrinconada entre la crisis económica y la larga guerra civil europea. Del mismo modo, el problema de las transiciones a la democracia y de las fronteras, tanto materiales como inmateriales, entre democracia y dictadura ha tenido un peso importante a la hora de vertebrar los debates.

Una vez más, la reflexión llevaba a hablar de los intelectuales y de la dificultad para muchos de ellos de llevar a cabo una reflexión crítica, o en muchos casos autocrítica, sobre su propia experiencia vital.

En otro orden de problemas y conceptualizaciones, el tema de las transiciones representaba otro momento álgido de los debates debido a la importancia que revisten estos momentos históricos y dado que a luz de los mismos se producen reflexiones que tendrán una transcendencia importantísima para releer el pasado y ofrecer una imagen del mismo bastante distorsionada y con una clarísima voluntad política. En el caso portugués, se subrayó la importancia de ver la transición como un elemento todavía más poliédrico, puesto que la Constitución de la República, nacida después del golpe de Estado de 1974, preveía una ulterior transición hacia el socialismo o hacia las condiciones para el ejercicio del poder por parte de los trabajadores. Y el caso portugués ofreció asimismo un espejo sugerente en relación con las continuidades y rupturas entre un régimen y otro. De este modo, el intenso debate sobre la naturaleza del fascismo y sobre las otras dictaduras reaccionarias ha coincidido sobre la oportunidad de continuar aquella corriente historiográfica más partidaria de comparar totalitarismo del siglo XX, como gran herramienta/cajón de sastre interpretativo y comparativo.

El papel de la Iglesia

En el mundo mediterráneo, cualquier régimen autoritario, incluso los que tenían pretensiones totalitarias, tenía que convivir con la Iglesia católica y precisaba del apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no hubo un patrón único y, como veremos, algunas dictaduras fueron clericales por devoción y otras por obligación, algunas fueron extremadamente militaristas y otras subordinaron el Ejército al partido único. En todo caso, las dictaduras acabaron cayendo, pero la Iglesia y los ejércitos, aunque no sin evidentes desgastes, sobrevivieron a su desmantelamiento.

El apoyo de la Iglesia y de los católicos a los regímenes autoritarios fue especialmente evidente en España, Portugal y Austria. En cambio, como es lógico, su encaje con los regímenes plenamente totalitarios de Italia y Alemania fue mucho más difícil.

El caso español es bien conocido ya que el apoyo de las bases católicas y de la jerarquía eclesíástica al levantamiento militar de julio de 1936 fue público y notorio, aunque hubo algunas excepciones. El documento más importante que ratifica la unión entre los militares antirepublicanos y la Iglesia española es la carta colectiva de los obispos españoles de julio de 1937, firmada por 43 obispos, con las únicas excepciones importantes del arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, y del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, dolido este último por los fusilamientos de sacerdotes nacionalistas llevados a cabo por los franquistas. Algunos arzobispos y obispos calificaron la Guerra Civil de guerra religiosa y de cruzada, aunque la citada carta colectiva se limita a hablar de un "plebiscito armado". En general, la Iglesia ignoró la durísima represión franquista, difundió con todo detalle las matanzas y los incendios de Iglesias en la zona republicana y consideró comunistas a todos los defensores de la República.

Así, no es extraño que el nuevo régimen franquista tuviera un fuerte componente católico en su versión más conservadora y tradicionalista, del que hacían gala los carlistas, el grupo de Acción Española y destacados intelectuales como Ramiro de Maeztu y Marcelino Menéndez y Pelayo.

Se trataba de construir un Estado confesional en el cual la Iglesia controlase la moral pública y privada, la educación y la cultura. La juventud y la mujer serían objeto de acción preferente y la Acción Católica y otras organizaciones clericales se implantarían hasta en el último rincón de España.

Y es que, para estos católicos reaccionarios, españolidad y catolicismo eran las dos caras de una misma moneda, ya que la religión católica había sido el eje forjador de la unidad nacional española. El nacionalcatolicismo era doblemente excluyente, dado que propugnaba la unidad católica del Estado y menospreciaba a los católicos nacionalistas, vascos o catalanes.

La Iglesia católica legitimó a todos los niveles el régimen franquista. El mismo general Franco era admirado por muchos obispos y sólo se consideraba responsable ante Dios y ante la historia.

Desde el primer momento, los católicos aportaron buena parte de los altos cargos y de los ministros de Franco. En concreto, entre monárquicos y católicos, un 16% entre 1939 y 1945 y un notable 27% entre 1945 y 1957. Inicialmente, muchos de estos cargos procedían de un grupo elitista, la Acción Católica Nacional de Propagandistas y, posteriormente, predominaron los altos cargos vinculados al grupo radical católico Opus Dei.

Sin embargo, sobre todo en los primeros tiempos, la Iglesia desconfió de las pretensiones totalitarias de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Es importante notar que, si bien Onésimo Redondo y José Antonio Primo de Rivera eran católicos tradicionalistas, el discurso político de Ramiro Ledesma era más estatista, laico y, a su manera, revolucionario.

Ya en la posguerra, los nacionalcatólicos presionaron para reducir el poder de la Falange. Sin duda la evolución de la Segunda Guerra Mundial les fue favorable y el nacionalcatolicismo se impuso claramente hacia 1945. Aunque los sectores sindicalistas y falangistas siempre tuvieron cierto peso, fueron los católicos los que predominaron en el llamado Movimiento Nacional, denominación que también recibía Falange como partido único del Estado y cantera de cargos políticos.

De hecho, el auge de Acción Católica, que en 1951 tenía 420.000 miembros, fue paralelo a la desmovilización de Falange Española Tradicionalista. Sin partidos políticos, sin asociaciones culturales o recreativas de carácter progresista, y con una fuerte censura, la Iglesia era omnipresente en la España franquista de los años cuarenta y cincuenta.

En Italia, las relaciones entre la Iglesia y el Estado fascista fueron muy diferentes. El mismo Mussolini, y buena parte de los jefes fascistas, eran ateos y anticlericales aunque, por puro pragmatismo, colaboraron con los sectores católicos y llegaron a acuerdos con el Papa de Roma. Sin embargo, el

carácter totalitario del fascismo, con su voluntad de controlar todos los ámbitos de la vida y crear un hombre nuevo, chocaba frecuentemente con las asociaciones y las jerarquías católicas.

El fascismo coincidía con el catolicismo en su rechazo al liberalismo, al socialismo y a la masonería. Así, los católicos más derechistas siempre consideraron el fascismo como un buen relevo del sistema liberal democrático y un baluarte contra una posible revolución obrera. Ningún católico hizo nada para evitar que Mussolini conquistara el poder en 1922. También es cierto que el líder fascista, a finales de 1922 y a comienzos de 1923, se granjeó las simpatías de los católicos al perseguir la masonería y al volver a colocar crucifijos en las aulas de las escuelas públicas. Así, el Partido Popular, fundado en 1919 como un partido católico de masas, apoyó al primer gobierno de Mussolini. Pero hacia 1923-24, este partido se dividió entre partidarios y enemigos del fascismo. Entonces aparecieron diversos grupos de católicos profascistas, como la Unione Nazionale (1923) y el Centro Nazionale Italiano (1924). Pero su principal líder, Luigi Sturzo, se opuso al fascismo y tuvo que acabar exiliándose a Londres en 1924. En esos años, las bandas fascistas asaltaban ocasionalmente algunos centros católicos especialmente reticentes al nuevo régimen.

No hay duda de que el Vaticano sacrificó el Partido Popular para reconciliarse con Mussolini. Algunos destacados jesuitas jugaron un papel muy importante en las negociaciones entre la Santa Sede y el gobierno fascista, que culminaron en los Acuerdos de Letrán, en 1929. Estos acuerdos incluían un Tratado que reconocía la plena independencia de la ciudad del Vaticano, una Convención Financiera que indemnizaba cuantiosamente a la Santa Sede y un Concordato que reconocía la autonomía de la jerarquía eclesiástica en Italia, imponía la enseñanza obligatoria de la doctrina católica en todas las escuelas primarias y secundarias y especificaba que el Estado reconocía a la Acción Católica.

Pero los verdaderos fascistas no querían compartir ningún ámbito de poder con una Iglesia que tenía su propia visión del mundo y del hombre. En 1926, los sindicatos católicos fueron prohibidos y se limitaron las actividades de los Esploratori Cattolici. En 1929, Mussolini tuvo que intervenir personalmente para evitar las reticencias de los fascistas anticlericales. Pero la peor crisis llegó en 1931, cuando el mismo Mussolini

mandó cerrar temporalmente los locales de la Acción Católica. Con todo, no se llegó a una ruptura abierta, pero la Iglesia y el fascismo rivalizaron en los años treinta por el control de la juventud y por la formación de futuros líderes. Con este objetivo, el papa Pío XI impulsó todo lo que pudo la Acción Católica, aunque procuró no entrar en conflicto con las autoridades fascistas. Así, consiguió convertirla en una alternativa a las organizaciones fascistas de carácter cultural y social.

La jerarquía católica intentó influir en el fascismo en una dirección derechista y clerical. Por otra parte, nunca apoyó a la minoría católica heredera del ala izquierda del desaparecido Partido Popular, que era inequívocamente antifascista.

La mayoría de los católicos aceptaron la dictadura de Mussolini, pero reaccionaron en contra cuando las organizaciones de la Iglesia fueron amenazadas. En 1935, casi todos los católicos apoyaron con entusiasmo la guerra de agresión contra Etiopía, que, paradójicamente, era el único país cristiano de África. En 1937, con la Guerra Civil española como trasfondo, la jerarquía católica insistió en su anticomunismo y en el hecho de que, precisamente, el fascismo era un baluarte contra el comunismo en virtud de ideas como la jerarquía, el orden, la familia y, como no, la religión. Además, casi toda la Iglesia consideraba el fascismo como un régimen autoritario y católico, cerrando los ojos a su verdadera naturaleza totalitaria y anticlerical.

Algunos católicos italianos no aceptaron de buen grado la progresiva transformación de Italia fascista en satélite de la poderosa Alemania nazi. El Vaticano estaba molesto por la persecución de los católicos en Alemania y la anexión de la católica Austria (marzo de 1938) incrementó su descontento. Los católicos también criticaron las leyes raciales antisemitas, de manera que algunas publicaciones fueron secuestradas por la policía de Mussolini.

Pero, en conjunto, el mundo católico italiano aceptaba la legitimidad del régimen fascista. Los intelectuales católicos más destacados intentaban conciliar el pensamiento católico con el corporativismo fascista. Y, mientras tanto, mantenían y desarrollaban una Acción Católica demasiado apolítica para ser perseguida por el fascismo, pero suficientemente potente para influir en muchos ámbitos de la cultura y la sociedad. Asimismo, Acción Católica estaba formando una élite de profesionales católicos militantes que podrían constituir los cuadros del partido político más arraigado en Italia en caso de que el fascismo fuese derrotado.

A diferencia de Mussolini, el austriaco Engelbert Dollfuss era inequívocamente católico y clerical. Este dirigente socialcristiano llegó al poder en Austria en 1932 y gobernó inicialmente con el apoyo de la Liga Agraria y el Heimatblock. En marzo de 1937, derogó la Constitución y pasó a gobernar por decreto. Su régimen católico y conservador imitó algunos aspectos de la Italia de Mussolini, de manera que Pasquale Villani se refiere a sus dirigentes como “fascistas clericales”. Pero ante todo fue una dictadura antisocialista y anticomunista, aunque también se opuso al nazismo y el mismo Dollfuss murió durante una fracasada intentona golpista nacionalsocialista en julio de 1934.

En Portugal, el régimen salazarista tuvo también en el catolicismo uno de sus fundamentos ideológicos. El mismo António de Oliveira Salazar había estudiado en un seminario y era una persona muy devota. El partido oficialista que se creó hacia 1930 tenía como divisa “Dios, patria y familia”. Según el mismo Salazar, como ha recordado Rui Luis Vide de Cunha Martins, “nosotros somos los que no discutimos a Dios, no discutimos a la patria, no discutimos a la historia y no discutimos a la familia”. En consecuencia, el Estado Novo, instaurado con la Constitución de 1933, tenía un sentido restaurador de la fe católica más tradicional, hasta el punto de que el salazarismo puede definirse como una forma cristiana y conservadora del autoritarismo político.

El régimen de Vichy, el efímero Estado Francés (1940-1944), también provocó el entusiasmo de los sectores católicos tradicionalistas, que consideraban cerrada la etapa, para ellos lamentable, de la Tercera República francesa y su legislación laicista (1870-1940). La Iglesia católica confirió al mariscal Philippe Pétain una cierta aureola de religiosidad, y el cardenal Gerlier, arzobispo de Lyon, no dudó en afirmar que “Pétain es Francia y Francia es Pétain”. Las asociaciones y los grupos más clericales esperaban que Vichy hiciera realidad sus proyectos políticos, sociales y culturales. El nuevo Estado Francés, de hecho, se opuso a la escuela laica y a la masonería y revocó la trascendental Ley de 1904 que prohibía a las órdenes religiosas que se dedicasen a la enseñanza. Por otra parte, también la Iglesia reformada de Francia manifestó su apoyo al régimen autoritario del mariscal Pétain.

Sin embargo, a diferencia de España y Portugal, el clericalismo no predominó totalmente en Vichy, ya que también apoyaban al nuevo régimen

notorios anticlericales. A principios de 1941, el ministro de Educación, Jacques Chevalier, un católico radical, fue destituido pese a las protestas de la Iglesia católica. Le sustituyó un moderado, Jérôme Carcopino, que fue acusado por la prensa proalemana de París de ser un “*protecteur des juifs et des francmaçons*”.

La cuestión religiosa también fue muy importante en el caso de la singular dictadura croata. El Estado teóricamente independiente de Croacia fue creado en 1941 bajo la tutela de Alemania e Italia. Dirigido por el extremista Ante Pavelic, contó con el apoyo del bajo clero católico que consideraba su régimen como un bastión contra la Iglesia ortodoxa. Sin embargo, el arzobispo de Zagreb, Stepinac, y la mayoría de los obispos se mostraron en todo momento mucho más reticentes.

Ejército y militarismo en los regímenes autoritarios

Por su misma esencia, los regímenes autoritarios, así como los totalitarios, disponen del imprescindible apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque su vinculación a ellas puede adoptar formas muy diferentes.

Sin embargo, son escasos los ejemplos en los que, como en España, el Ejército y el militarismo constituyen la base esencial del régimen autoritario, con algunas veleidades fascistas, del general Franco. Es un hecho bien documentado que tres largos años de guerra civil cohesionaron a las Fuerzas Armadas del llamado bando “nacional” y las depuraron de todos aquellos generales o jefes que no tenían una mentalidad conservadora y ultranacionalista o que no manifestaban una inequívoca adhesión al general Franco. Con todo, en los inicios, algunos generales golpistas como Queipo de Llano, Cabanellas, Aranda o Goded no respondían a esas características, ya que muchos tenían un pasado republicano o vinculado a la masonería. Y también es cierto que en la inmediata posguerra había algunos generales eminentemente monárquicos o carlistas o, en menor número, falangistas. Pero frecuentemente fueron eclipsados, o bien constituyeron la excepción en un Ejército básicamente y muy mayoritariamente conservador, reaccionario, españolista, clerical y, por encima de todo, franquista.

Siempre resultó evidente que el régimen franquista había nacido de un levantamiento militar, de manera que los militares eran el puntal más importante de un Nuevo Estado, que tenía precisamente a un militar de carrera

en su cima, un veterano de la guerra de Marruecos y de la represión de la revolución de Asturias, el “generalísimo” Francisco Franco.

En consecuencia, no resulta extraño que fuese el Ejército uno de los instrumentos básicos de la represión política y la principal cantera de donde se nutrieron los ministerios y los altos cargos de la administración franquista, de manera que entre 1939 y 1945 los militares monopolizaron el 45% de los nombramientos.

El Ejército “de Franco” era católico integrista, conservador, orgulloso de su tarea y convencido de que lo militar era siempre superior a lo civil. El Ejército tenía derecho a controlar a la población y, de hecho, los militares actuaban como las máximas autoridades, ya que los capitanes generales tenían preeminencia sobre los gobernadores civiles. Además, el Ejército era el más genuino exponente de la nación española, entendida esta como una ampliación de la lengua y cultura castellanas. El culto casi místico a la patria española implicaba un unitarismo que negaba la existencia de problemas nacionales en España. El idioma castellano era para ellos un elemento aglutinador y un pilar fundamental de la nación. Igualmente, el Ejército debía cumplir un papel protagonista en el proceso de nacionalización/españolización a través de la aculturación de los soldados de recluta masiva que pasaban por sus filas. Castilla era por cierto la esencia de la nación y se consideraba que el Ejército era el reflejo de las cualidades y de los valores castellanos que, naturalmente, eran superiores a los de las otras regiones. Por otra parte, la patria era un organismo con vida plena que actuaba a través de su gobierno bajo el mando de un único jefe, el general Franco. De esta manera cualquier opositor al régimen pasaba a ser también antipatriótico y antiespañol. Además, la patria se consideraba eterna, permanente, y podía haber gobiernos transitorios, como el de la Segunda República, contrarios a la patria, contra los cuales era un deber sublevarse. También se exaltaban las virtudes de una supuesta raza hispana, surgida de la fusión entre íberos y celtas, y una religiosidad que fundía en una única causa a Dios y a la patria y recogía todo el bagaje doctrinal de los monárquicos antiliberales. El nacionalcatolicismo otorgaba al Ejército español un componente de dogmatismo que podía degenerar en fanatismo.

Como pilar central del personalista régimen de Franco, que por cierto siempre se consideró un militar y no un político, las Fuerzas Armadas gozaron

de numerosas ventajas materiales. A mediados de los años cuarenta, en un contexto de grandes problemas económicos, los militares acaparaban más del 40% del presupuesto del Estado.

Por último, es importante señalar que, excepto dos tenientes generales falangistas (Muñoz Grandes y Yagüe), la cúpula militar franquista era contraria a los elementos más proclives al totalitarismo. En cambio, una treintena de generales, muchos de los cuales monárquicos, se dejaron sobornar por las autoridades británicas para que España se mantuviese neutral durante la Segunda Guerra Mundial.

Casi en las antípodas del caso español, el Ejército italiano no tuvo un papel activo destacado en la toma del poder por los fascistas. El “Regio Esercito” de la posguerra mundial estaba apegado a su tradicional autonomía política y Giorgio Rochat ha podido hablar de “la tradicional superación entre Ejército y país”. En general, los altos mandos italianos eran nacionalistas radicales, imperialistas en política exterior y conservadores, incluso reaccionarios, en política interior. Muchos de ellos eran propensos a creer en una solución autoritaria y, aunque los gobiernos liberales les habían hecho muchísimas concesiones, no tenían ningún interés en defender el sistema liberal democrático parlamentario. Los altos mandos del Consejo del Ejército consideraban que los nacionalistas radicales y los fascistas eran instrumentos válidos para reafirmar su poder y autonomía.

En 1922, con Benito Mussolini entregado a la conquista del poder, era imprescindible que los fascistas contase con el apoyo del Ejército. El líder fascista no consintió ninguna fisura en las filas fascistas en su política de aproximación y unión de intereses con los altos mandos del “Regio Esercito”. Curiosamente, en este proceso de convergencia un sector de la masonería jugó un papel de cierta importancia. En todo caso, el fascismo tenía suficientes simpatías en el Ejército como para impedir toda resistencia al acceso de Mussolini al poder e incluso para influir sobre el monarca. La única excepción importante fue el general Pietro Badoglio, que expuso al rey que la Marcha sobre Roma se disolvería al primer disparo. De todas maneras, tampoco se opuso activamente a régimen fascista y tras un período de ostracismo se integró en el sistema.

A partir de octubre de 1922, el Ejército italiano se sometió sin problemas a la dirección política fascista y asumió su retórica. Sin embargo,

mantuvo su autonomía, se reforzó el poder del Consejo del Ejército y las Fuerzas Armadas continuaron al margen del resto del país. En 1924-25, la necesidad de imponer recortes presupuestarios y las repercusiones del caso Matteoti parecieron debilitar la alianza entre el Ejército y el Partido Fascista. Pero cuando Mussolini asumió también el ministerio de la Guerra, se reanudó la alianza en aras de un Estado autoritario y un Ejército bien dotado económicamente y públicamente reconocido y respetado. Así, el fascismo podía consolidarse sin que los militares plantearan problemas, y el ala conservadora reaccionaria del Ejército reafirmaba su predominio. Por otra parte, y como en el caso alemán, la Fuerza Aérea fue el arma más sensible a la penetración ideológica fascista.

Paradójicamente, la fanfarrona retórica militarista e imperialista no estuvo acompañada de una renovación técnica y teórica del Ejército italiano. La precipitada entrada en la Segunda Guerra Mundial provocó la caída del fascismo y la derrota del Ejército, que se desvinculó demasiado tarde del totalitarismo fascista.

En Portugal, aunque el régimen autoritario debía su existencia al golpe de Estado de mayo de 1926, encabezado por el general Gomes da Costa, que terminó con la República liberal y parlamentaria, la dictadura militar pronto tuvo que permitir la preeminencia de un civil, el profesor de Coimbra António de Oliveira Salazar. Con todo, la evolución hacia un régimen autoritario, conservador y clerical, no fue del gusto de todos los militares y un sector minoritario del Ejército protagonizó tres grandes levantamientos a favor de la República democrática en 1927, 1928 y 1931. Aunque el grueso de las Fuerzas Armadas portuguesas se identificó con Salazar y con su política de defensa a ultranza de los territorios ultramarinos, es importante destacar que, en 1958, un militar, el general Humberto Delgado, se atrevió a presentarse como candidato opositor en los comicios presidenciales. A partir de 1961, las guerras de descolonización en África exigieron grandes efectivos militares y grandes sacrificios a los contingentes desplazados a los trópicos, tanto a la tropa como a los oficiales. Fue precisamente un movimiento de jóvenes oficiales, el conocido “movimento dos capitães”, el que protagonizará finalmente la Revolución de abril de 1974.

La mucho más efímera Francia de Vichy (1940-44) también debía en buena parte su existencia a los militares, aunque a diferencia de lo acontecido en

Portugal, no llevaron a cabo un golpe de Estado, y, a diferencia de España, no se trataba de generales victoriosos sino de jefes de unas Fuerzas Armadas totalmente derrotadas por el enemigo. Es bien conocido el papel central que jugó el general Philippe Pétain en la construcción y dirección del nuevo Estado Francés, pero no debe olvidarse la decisiva influencia ejercida por el general Maxime Weygand, que era el comandante en jefe del Ejército en el verano de 1940 y que apoyó decididamente el Armisticio y la supresión de la legalidad republicana. Por otra parte, a diferencia del resto de regímenes autoritarios de Europa, en la Francia de Vichy los almirantes jugaron un papel muy importante. El Ejército francés había sido barrido por los alemanes, pero no fue este el caso de la moderna Marina de Guerra. Vichy casi no tenía Ejército pero todavía mantenía su Armada y sus colonias de ultramar. Entre todos los almirantes, el más carismático fue Jean-François Darlan, vicepresidente del gobierno del Estado Francés. Se trataba de todo un personaje, de carácter intrigante, aspirante a sucesor de Pétain, antibritánico y antialemán al mismo tiempo. Otros almirantes que ocuparon altos cargos en Vichy o en las colonias fueron Platon, Estéva, Juin, Decoux y Robert. También eran almirantes los prefectos de unos siete departamentos metropolitanos.

En los Balcanes, también fue muy importante el peso del estamento militar en las dictaduras que proliferaron en los años treinta. En Grecia, tras la derrota frente a los turcos (1922), un sector de la oficialidad del Ejército hizo abdicar al rey Constantino (1922). A partir de entonces, el Ejército condicionó la vida política y fueron frecuentes los golpes de Estado, algunos de ellos fracasados como el del general Ioannis Metaxas en octubre de 1923. Sin embargo, tras la restauración de la monarquía, en la figura de Jorge II, y en un momento de gran agitación social, en agosto de 1936, el mismo Metaxas disolvió el Parlamento. Con el apoyo del rey y del Ejército, instauró una dictadura autoritaria que imitaba en algunos aspectos los regímenes de Salazar, Franco y Mussolini. Su régimen promovió una recuperación del pasado clásico y puso énfasis en los valores del militarismo espartano.

En cambio, en Bulgaria y Rumanía, los golpes de Estado militares de 1934 y 1935, en el primer caso, y de 1938, en el segundo, estuvieron sobre todo al servicio de sus respectivas monarquías y no surgieron, en aquellas fechas, jefes militares carismáticos como Ioannis Metaxas. Sin embargo, en septiembre de 1940, en un momento de crisis nacional en Rumanía, llegó al

poder mediante un decreto del rey Carlos II un prestigioso militar de carrera, el general Ion Victor Antonescu. Sólo tardó un día en dar un golpe de Estado e instaurar una dictadura que proclamó el nacimiento del nuevo “Estado Nacional Legionario”. Inicialmente gobernó con el movimiento fascista de la Guardia de Hierro, pero con el apoyo del Ejército pronto lo marginó completamente. Militar competente y nacionalista fanático, se consideraba el Pétain de Rumania, y, al igual que el mariscal francés, condujo a su país al desastre durante la Segunda Guerra Mundial.

Por lo que se refiere a Yugoslavia, sus Fuerzas Armadas también eran un importante factor político y así, en marzo de 1941, como rechazo a la incorporación de este país al Pacto Tripartito, el general Dusan Simovic dirigió un golpe de Estado que mandó al exilio al hasta entonces regente príncipe Pablo y proclamó rey al joven príncipe Pedro II. Simovic asumió el cargo de presidente del Gobierno, pero su administración fue muy breve a causa de la invasión del país por Alemania y sus aliados en abril de ese mismo año.

Sin duda, en el ámbito mediterráneo, la Iglesia y el Ejército fueron pilares indispensables de los regímenes autoritarios e incluso del totalitarismo fascista italiano. Pero también frenaron frecuentemente las propuestas más ideológicas y modernizadoras. En muchos casos marcaron unos límites, aunque fuesen difusos, al poder de los dictadores y permitieron el desarrollo de sectores del pensamiento y de la acción al margen de las estructuras del Estado y del partido único. En consecuencia, protagonizaron en mayor o menor medida los procesos de transición, al tiempo que mantuvieron elementos de continuidad que permitieron la persistencia o la reconstrucción del Estado.

Bibliografía destacada

AUBERT, P. *La frustration de l'intellectuel libéral (Espagne 1898-1939)*.

Cabris, Ed. Sulliver, 2010.

AUBERT, P. (dir.). *Crise espagnole et renouveau idéologique et culturel en Méditerranée. Fin XIXe-début XXe siècle*. Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2006.

- BERAMENDI, J. y BAZ, M. J. (eds.). *Identidades y memoria imaginada*. Valencia, PUV, 2008.
- BOTTI, A. *Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975)*. Madrid, Alianza, 1992.
- CARDONA, G. *El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil*. Madrid, Siglo XXI, 1983.
- CASANOVA, J. *La Iglesia de Franco*. Madrid, Temas de Hoy, 2001.
- CASASSAS, J. *La fàbrica de les idees. Política i cultura a la Catalunya del segle XX*. Catarroja, Afers, 2009.
- CASASSAS, J. *El temps de la nació*. Barcelona, Proa, 2005.
- CATROGA, F. *Entre Deuses e Césares. Secularização, Laicidade e Religião Civil*. Coimbra, Almedina, 2006.
- CATTINI, G. C. *Prat de la Riba i la historiografia catalana. Intel·lectuals i crisi política a la fi del segle XIX*. Catarroja, Afers, 2008.
- COINTET, M. *L'Église sous Vichy, 1940-45*. París, Perrin, 1998.
- COSTA PINTO, A., EATWELL, R. y LARSEN, S. U. *Charisma and Fascism in Interwar Europe*. Londres, Routledge, 2007.
- COSTA PINTO, A. *O Salazarismo e o Fascismo Europeu. Problemas de interpretação nas ciências sociais*. Lisboa, Editorial Estampa, 1992.
- FERRO, M. *Pétain*. París, Fayard, 1987.
- GRILLI DI CORTONA, P. y LANZA, O. *Tra vecchio e nuovo regime. Il peso del passato nella costruzione della democrazia*. Boloña, Il Mulino, 2011.
- HIGHAM, R. Y VEREMIS, T. *The Metaxas Dictatorship. Aspects of Greece 1936-1940*. Atenas, Eliamep-Vryonis Center, 1993.
- LOSADA MALVÁREZ, J. C. *Ideología del Ejército Franquista*. Madrid, Istmo, 1990.

- MARIMON RIUTORT, A. *La crisis de 1898*. Barcelona, Ariel, 1998.
- MELLÓN, J. A. (coord.). *Orden, jerarquía y comunidad. Fascismos, dictaduras y postfascismos en la Europa contemporánea*. Madrid, Tecnos, 2002.
- NOIRET, S. *La campagna elettorale nell'Europa mediterránea*. Monogràfic de la revista Memoria e Ricerca, n. 8 (2001).
- PAXTON, R. O. *La France de Vichy 1940-1944*. París, Éditions du Seuil, 1997.
- POMBENI, P. *La ragione e la passione. Le forme della politica nell'Europa contemporánea*. Bologna, Il Mulino, 2010.
- PRESTON, P. *Franco. Caudillo de España*. Barcelona, Grijalbo, 1994.
- ROCHAT, G. *L'esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini*. Roma-Bari, Laterza, 1967.
- SANTACANA TORRES, C. *El franquisme i els catalans. Els informes del Consejo Nacional del Movimiento*. Catarroja, Afers, 2000.
- SERRA BUSQUETS, S. (ed.). *Cultura i compromís polític a la Mallorca contemporània. Els intel·lectuals a l'àmbit cultural català*. Palma de Mallorca, Fundació Emili Darder, 1995.
- TANNENBAUM, E. R. *La experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia (1922-1945)*. Madrid, Alianza, 1975.
- TUSELL, J., GENTILE, E., DI FEBBO, G. (eds.) Y SUEIRO, S. (coord.). *Fascismo y franquismo. Cara a cara. Una perspectiva histórica*. Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.
- VIVER PI-SUNYER, C. *El personal político de Franco (1936-1945)*. Barcelona, Vicens Vives, 1978.